



E

Editorial

Efectos colaterales de la reconstrucción

El Gobierno ha debido modificar algunas de las propuestas iniciales del proyecto de ley que anunció esta semana el Presidente.

Tras encabezar la reunión del gabinete regional de Valparaíso, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, aclaró ayer una de las dos dudas capitales que dejó la presentación del proyecto de Reconstrucción y Crecimiento Económico hecha por el Presidente José Antonio Kast esta semana: el impacto de la iniciativa en la gratuidad universitaria. García Ruminot dijo que el tema quedó resuelto tras una reunión que sostuvo la noche del jueves con los ministros de Hacienda, Jorge Quiroz, y del Interior, Claudio Alvarado, con quienes acordó eliminar la restricción de gratuidad por sobre los 30 años de edad que inicialmente estaba en la iniciativa. El cambio es una muestra de la ductibilidad que tiene el equipo de ministros a cargo de la negociación en el Congreso y una señal sobre cuáles son los límites de un proyecto que aborda una treintena de medidas de largo alcance y variadas temáticas.

Un nuevo golpe a las finanzas municipales podría afectar directamente a las personas más vulnerables de cada comuna.

La aclaración, además, allana el camino del proyecto de ley entre algunos parlamentarios del oficialismo, aunque sirve poco para convencer a los diputados del PDG que aún lo ven como insuficiente en sus ayudas a la clase media.

El otro punto clave es la merma que provocará en el Fondo Común Municipal la exención del pago de contribuciones a personas de 65 años o más. Esta medida ocasionará un impacto directo en municipios que dependen de estos recursos y ya se ven afectados por las alzas en el precio de los combustibles. El desfinanciamiento de los gobiernos locales no puede ser visto como un efecto colateral menor de este proyecto de ley. Sumado al recorte que hizo Hacienda a las platas del Gobierno Regional este año -estimado en \$ 6.500 millones-, un nuevo golpe a las finanzas municipales podría afectar directamente a las personas más vulnerables de cada comuna y provocar una paradoja difícil de explicar a la ciudadanía: los beneficios no llegarán allí donde más se necesitan.